
AMÉRICA LATINA ANTE LAS NUEVAS AMENAZAS

Aproximación Estratégica

Jesús R. Argumosa Pila¹

La nueva estrategia de América Latina y el Caribe contra las nuevas amenazas, debiera basarse en tres postulados: uso de todo el poder del Estado; hacerlas frente como un todo; y que la respuesta sea multilateral.

Según el Military Balance 2010, América Latina afronta numerosas y complejas amenazas en materia de seguridad y estabilidad militar que pone en riesgo el equilibrio regional. Asimismo, indica que las naciones latinoamericanas tienen en la actualidad “la necesidad y la oportunidad de hacer un esfuerzo colectivo a favor de la seguridad de la región”.

La necesidad surge, en parte, por la falta de atención en Estados Unidos para gestionar los conflictos regionales en Latinoamérica, y la oportunidad se suscita, por el hecho de que hay un número creciente de nuevas amenazas que ponen en peligro la estabilidad regional.

Estas nuevas amenazas son el deterioro democrático, el temor a un fracaso del Estado, el crimen organizado transnacional, el terrorismo, las guerrillas, el tráfico ilegal de armas, drogas y personas, la competencia por recursos naturales, la degradación medioambiental y el desbaratamiento de la cohesión social.

Hoy, América Latina carece de conflictos interestatales, pero es la segunda región más violenta del planeta. Su tasa de homicidios supera cuatro veces la media mundial, y la mitad de los secuestros globales ocurren en la región. Casi 20 años después de los acuerdos de paz, el istmo centroamericano tiene el triste record de ser la subregión menos segura del globo y una de las más pobres del continente.

¹ General de División. Ex-Jefe de la Escuela de Altos Estudios de la Defensa (2005-2009) (España). Como General de Brigada y Jefe de la División de Estrategia y Cooperación del Estado Mayor Conjunto de la Defensa, lideró el documento Estrategia Militar Española, publicado en el año 2003. Fue Coronel Jefe del Regimiento de Ingenieros N.º 1 de la División Mecanizada. Pasó a la Reserva en julio de 2009.

Ha impartido numerosas conferencias en cursos y seminarios sobre relaciones internacionales, estrategia, seguridad y defensa. Asimismo, ha publicado más de una centena de artículos sobre geopolítica, geoestrategia, seguridad, defensa y doctrina militar en diferentes revistas civiles y militares.

Actualmente, es el Coordinador del Área Iberoamérica en la Revista ATENEA (España). tremeo@hotmail.com

Fecha de presentación del artículo: julio de 2010.

El Estado fallido que es Haití, al descubierto tras el terremoto del 12 de enero, el golpe de Estado en Honduras en junio de 2009, la polarización entre indígenas y no indígenas en Bolivia, el conflicto armado de Colombia, el autoritarismo en Cuba y Venezuela, y la guerra del narco en México son muestras palpables del alto grado de conflictividad que vive la región.

Sus principales causas son el narcotráfico, los altos niveles de desigualdad, la debilidad del Estado y la polarización política. Pese a la ausencia mencionada de conflictos interestatales, los gastos de defensa crecieron en más de un tercio en el periodo 2000-2008. Este aumento refleja el ascenso de Brasil, la lucha contra redes criminales, la regionalización del conflicto colombiano y un mayor papel de los militares en países como Honduras y Venezuela. El caso de México y otros países refleja la tendencia a que la principal respuesta del Estado a la violencia es la militar.

A continuación voy a presentar, en primer lugar, una visión general del origen, estado y evolución de las causas señaladas con los aspectos más relevantes que las caracterizan para, seguidamente, exponer la situación existente en los países latinoamericanos más afectados por las nuevas amenazas. Finalizaré con unas reflexiones estratégicas acerca de las posibles medidas a tomar para mantener la estabilidad del presente y del próximo futuro en el subcontinente.

LAS CAUSAS. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN

El **narcotráfico**, a partir de la década de los noventa, pasó a ser un tema de alto interés en las esferas políticas y sociales de los países de América Latina. Durante mucho tiempo, el problema de las drogas ilegales solo era tratado por los expertos en sanidad y algunos organismos estatales dedicados a la lucha contra el crimen organizado.

Sin embargo, hoy en día, la situación ha cambiado profundamente. Ahora el narcotráfico se ve como una seria amenaza a la seguridad nacional, pues afecta a todos los sectores políticos, económicos, sociales y culturales de cualquier Estado.

El Informe Mundial sobre Drogas 2010, publicado el pasado 13 de junio por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), ha destacado principalmente tres evidencias. Primero, que en México se puede ganar “la guerra” contra los cárteles y que las medidas tomadas por Felipe Calderón desde 2006 –si bien mejorables– fueron las necesarias. En segundo lugar, que el verdadero talón de Aquiles de la región no está en México sino en Centroamérica. Y por último, que el problema no es local –ya sea mexicano, centroamericano o colombiano– sino que se extiende a nivel regional y global ya que afecta tanto a toda América Latina como a Estados Unidos y a la Unión Europea.

Bien es verdad que la “guerra” contra los cárteles en el territorio mexicano es muy llamativa e importante y atrae fuertemente la atención de la comunidad internacional, pero no es menos cierto que el Triángulo Norte de Centroamérica –Guatemala, Honduras y El Salvador– está siendo mucho más afectado que México, con tasas de homicidios muy superiores a las de su vecino del norte y una alarmante penetración del narcotráfico en las estructuras e instituciones de los estados, en especial en Guatemala. En dichos países la intensa violencia generada por el tráfico de drogas plantea un grave problema para la

governabilidad. Honduras padece la tasa de mayor crecimiento de asesinatos en la región, lo que estaría vinculado a la llegada creciente de aviones cargados de cocaína desde Colombia y Venezuela.

Por cada 100.000 habitantes entre 2003 y 2008, la tasa de homicidios fue del 12% en México, mientras que en Honduras fue del 61%, 52% en El Salvador y 49% en Guatemala. El riesgo es mayor sobre todo en aquellos países pequeños como El Salvador, Guatemala y Nicaragua donde hubo en el pasado o hay "procesos de conmoción interna".

En estos últimos diez años, los cárteles se han expandido hacia países como Nicaragua, Guatemala y Honduras. Sus rutas, centros de acopio y sus teatros de operaciones se sitúan en las fronteras de México-EE.UU., México-Guatemala y Colombia-Venezuela.

Si lo analizamos a nivel regional observamos que Perú y Colombia lideran la producción de coca; Venezuela constituye un trampolín de la cocaína hacia Europa mientras que Centroamérica y México lo son con respecto a Estados Unidos. Brasil es ya el segundo consumidor regional de cocaína a escala mundial –tras los Estados Unidos– y en la región, seguido por Argentina y Chile. También se constata que el "deterioro" del combate al narcotráfico en Venezuela, ha contribuido a que este país fuera el origen de más de la mitad de la cocaína interceptada en el Atlántico entre 2006 y 2008.

A mayor abundamiento, los hechos ocurridos en Brasil, en el mes de mayo de 2006, en el estado de Sao Paulo, donde durante 5 días se efectuaron ataques contra organismos de seguridad, motines en las cárceles y toma de rehenes dejando 272 muertos entre ellos 92 policías, confirman la dimensión regional del fenómeno. Sin olvidar la situación en la Triple Frontera.

Por último, el problema del tráfico de drogas es mundial ya que si bien el consumo de cocaína ha disminuido en los Estados Unidos, la demanda ha aumentado en Europa, donde el número de consumidores se ha duplicado entre 1998 y 2008, de 2 a 4 millones. Desde el año 2008, el mercado europeo, valorado en 34 mil millones de dólares –entre 4 y 5 millones de consumidores–, se ha transformado casi en tan valioso como el de Estados Unidos –6 millones de consumidores– valorado en 37 mil millones de dólares. Asimismo, los consumidores de droga han aumentado considerablemente en Sudamérica y Estados Unidos ya no es el país con mayor tasa de crecimiento de consumidores, sino que lo son Brasil y Argentina. El subcontinente ya consume una quinta parte de la cocaína que produce.

Las **maras** son grupos que no responden a la actuación de simples bandas de delinquentes juveniles, sino a auténticas organizaciones criminales, unidas por el odio y la voluntad de destruir a sus contrincantes. Conforman redes inscriptas en flujos globalizados como migración, tráfico de drogas y de armas, modos culturales, corrientes de información y de imágenes.

Desde California a América Central, hay dos maras que dominan, la M18 y la MS13. Mara es apócope de marabunta, colonia de hormigas gigantes que devoran todo a su paso. Estos grupos surgieron en la jungla de asfalto de Los Ángeles, en Estados Unidos, en las calles 18 y 13, respectivamente, en los años 70 y 80 del siglo XX. Crecieron con la migración provocada por las guerras civiles, las crisis económicas, las catástrofes naturales y la marejada neoliberal que devastaron los países al sur del río Bravo.

A partir de los años 90, Estados Unidos realizó expulsiones masivas de inmigrantes, especialmente de miles de jóvenes delincuentes, encarcelados o no, originarios en su mayoría de América Central, donde las guerras, una tras otra, ya habían terminado. Más desarraigados y sin tener un objetivo o meta clara en “su” país –donde alguno de ellos no había vivido jamás–, estos jóvenes les dieron una orientación criminal a las pandillas locales existentes.

Con la fuerza de varias decenas de miles de miembros –entre 70.000 y 100.000 según fuentes oficiales–, las maras se desarrollan en el terreno de una sociedad descompuesta, de núcleos familiares desintegrados por la guerra, la migración, la violencia doméstica y los maltratos infantiles. Operan como familias alternativas para jóvenes entre 12 y 25 años de edad que no tienen perspectivas, ni objetivos ni futuro.

Durante el año 2004, miembros de la “Mara Salvatrucha” –o MS13–, abrieron fuego contra un autobús público, en la ciudad de Chamalecón, en Honduras, asesinando a 28 pasajeros, queriendo enviar un mensaje al gobierno nacional para que se terminara la ofensiva contra sus miembros. En el mismo año, en El Salvador, 100 miembros de la citada “mara” murieron calcinados en la cárcel.

La reacción de los países afectados por estas organizaciones ha sido a través del uso de la fuerza con programas nacionales como el “Plan Escoba” en Guatemala, “Mano Dura” en El Salvador y “Libertad Azul” en Honduras. La política represiva por medio del uso de la fuerza militar y policial, por parte de los diferentes gobiernos, ha dejado a un lado las medidas preventivas y de inserción social, convirtiendo los centros de reclusión en centros de reclutamiento de los “maras”. A primeros de este mes de julio, sobre un millar y medio de soldados han comenzado a custodiar los centros penitenciarios y otros miles patrullan las calles de San Salvador.

La **debilidad del Estado**, uno de los principales retos para la seguridad de la región, demanda con tremenda urgencia la necesidad de fortalecer la gobernabilidad. La democracia en América Latina es frágil y, por ello, las vulnerabilidades a las que se enfrenta el subcontinente, como pueden ser la falta de gobernabilidad, la violencia, la falta de cohesión social o étnica y la fragilidad institucional, se constituyen en grandes desafíos.

El empobrecimiento de la población por la falta de crecimiento económico ocasionada por la carencia de infraestructuras puede generar en algunos países procesos de descontento que minen la confianza en la clase dirigente y produzcan respuestas populistas de carácter ultranacionalista.

Este populismo, entendido como una política de carácter autoritario desarrollada especialmente durante procesos de transición y movilización social y política, es un gran detonador de inestabilidad. Se destaca por otorgar prebendas que acentúan la inequidad, sin resolver las situaciones de pobreza, al mismo tiempo que propicia un sistema de participación irregular, cuya expresión principal es el clientelismo. Por ello, limita la expresión democrática, el desarrollo de la ciudadanía y el derecho al acceso a bienes públicos básicos.

Otro aspecto importante que afecta a la seguridad es el de la corrupción en la región. Si la democracia es una condición indispensable para la estabilidad, la paz, la seguridad y el desarrollo económico, la corrupción debilita fuertemente esta condición de los Estados democráticos, al crear las condiciones favorables para la acción del crimen transnacional.

América Latina y el Caribe es una de las zonas mundiales donde existe el peligro de desarrollo de "estados fallidos". Es decir, Estados sin capacidad para implantar el imperio de la ley, detentar el monopolio de la violencia, proveer de servicios y bienes al conjunto de la población, en especial el de la seguridad. En estos casos se reducen las áreas donde opera el Estado de Derecho y se amplían los "espacios sin ley". La acción del crimen organizado genera una desafección de la política, de sus partidos y en definitiva del sistema democrático.

Como resultado de la debilidad del Estado, existe una sensación de falta de seguridad y de protección. Los espacios sin ley, los territorios donde está ausente el Estado aparecen como situaciones de "normalidad". Es allí, en esas zonas, en las que surgen otros poderes para imponer "su orden" y "sus normas" por medio de la violencia. Son actores armados al margen del Estado de Derecho.

En cuanto a las **desigualdades**, desde que se dispone de datos sobre los niveles de vida, América Latina y el Caribe ha sido una de las regiones del mundo que presenta mayor desigualdad. Los datos del último estudio realizado por el Banco Mundial, en el año 2003, muestran que la inequidad en el país menos desigual de la región (Uruguay) es superior respecto al país más desigual de Europa oriental y los países industrializados. En promedio, la desigualdad del ingreso ha tendido a empeorar en la región aunque las experiencias son variadas. Algunos países con relativa igualdad, como Argentina, Uruguay y Venezuela han experimentado aumentos en la desigualdad, el primero en forma drástica. Por el contrario, Brasil, históricamente el país con mayor desigualdad de la región, experimentó una leve pero significativa mejora, al igual que México.

El informe destaca que la raza y la etnia son los factores que determinan en forma más permanente las oportunidades y el bienestar de los individuos de esta región. Tanto los indígenas como los afrolatinos viven en considerable desventaja respecto de los blancos, según el informe, puesto que son éstos últimos los que reciben los ingresos más altos de la región. El estudio se centra en siete países (Brasil, Guyana, Guatemala, Bolivia, Chile, México y Perú) y revela que los hombres indígenas ganan entre 35-65% menos que los hombres blancos; la disparidad entre mujeres blancas y mujeres no blancas es similar.

En contraste con la brecha permanente relacionada con las diferencias raciales y étnicas, ALC sí ha experimentado avances en cuanto a acortar la disparidad de género en relación con el ingreso y la educación. En gran parte de la región, las niñas y las jóvenes están superando a los niños y jóvenes en términos de logros educacionales.

De acuerdo con el informe, tal como en el antiguo período colonial, hoy también son los grupos de élite los que dan forma a las instituciones y las políticas públicas para favorecer en primer lugar sus propios intereses. Un ejemplo de ello es que los países de la zona no lograron niveles altos de alfabetismo si no hasta bien entrado el siglo XX. El bajo nivel de apoyo prestado a la educación primaria contrasta con el generoso financiamiento que recibieron las universidades, donde se educaban los hijos de los grupos dominantes.

Para poner fin a la prolongada historia de desigualdad en la región de ALC, el estudio propone la necesidad de que las naciones emprendan profundas reformas de las instituciones políticas, sociales y económicas, mejoren el acceso de los pobres a servicios y bienes básicos –

en especial la educación-, entreguen transferencias de ingresos a las familias pobres y apliquen políticas públicas específicas para ayudar tanto a los indígenas como a los afrolatinos.

En América Latina y el Caribe, hoy como en el pasado, se apuesta fuertemente por la **polarización política**, es decir, por la adopción de posiciones políticas excluyentes o sectarias por parte de individuos y grupos que, a través de la eliminación de posiciones moderadas o simplemente intermedias, así como de un hostigamiento sostenido, pretenden un enfrentamiento o choque contra rivales identificados como contrarios o enemigos, e imponerse sobre ellos, a toda costa.

La idea que hay detrás de la polarización política es vencer y anular al presunto enemigo, como si se tratara de una guerra a muerte, fratricida, y no competir, debatir y derrotar al adversario en buena lid, como se plantea bajo los supuestos democráticos. No hay espacio para los grises, sino solamente para el blanco o el negro.

Sin duda, los extremismos han sido nefastos en la historia de los pueblos latinoamericanos, porque han sido intransigentes, intolerantes y absolutistas. Los extremistas no admiten el libre juego de opiniones ni la autonomía personal, ya que su objetivo es avasallar y esclavizar. El miedo y el terror son sus principales armas, y no permiten que haya ni disidencia ni contradicción. El que no se somete a sus designios es combatido, perseguido, expropiado o desterrado.

La alternabilidad en el ejercicio del poder político no es aceptada por los extremistas, sino vilipendiada y repudiada. Pretenden perpetuarse en el poder y aplastar cualquier oposición, resistencia o desavenencia. No ceden ni conceden, sino que seducen, descalifican y arrebatan.

De hecho, en algunos países, su situación nacional se ha agravado en la última década, justo cuando la bonanza petrolera les ha sonreído. Sin embargo, la polarización política existente ha impedido que gran parte de los ciudadanos no se hayan visto apoyados por sus gobernantes, sino más bien al contrario.

Todo este cuadro social deprimente se ha venido creando, a la sombra de un gobierno central donde sola persona, se reserva el poder decisorio de todas las cosas del Estado; dividiendo la nación en dos grandes bloques, uno al que se le da un trato preferencial a los ciudadanos en todos los aspectos, y el otro, al que se le niega, amenaza, persigue y excluye del disfrute de los derechos civiles, mercantiles, y jurídicos.

LA SITUACIÓN. PAÍSES MÁS AFECTADOS

México, desde el año 2006, cuando tomó el poder la nueva administración, se ha embarcado en la campaña antidroga más agresiva de su historia con el despliegue de 45.000 militares en todo el país. Las tropas mexicanas han requisado en los últimos dos años –2008 y 2009– unas 52.000 armas, 20 Tm de cocaína, 1.650 Tm de marihuana al mismo tiempo que han confiscado, durante 2008, 61 millones de dólares en ingresos ilícitos. Asimismo, han capturado a varios cientos de miles de traficantes incluyendo algunos miembros dirigentes de los cárteles.

Por otro lado, los cárteles de la droga de México han incrementado su fuerza a raíz de las restricciones que se han puesto a las rutas de tráfico de droga del Caribe, en los años 80 y del desmantelamiento de los cárteles colombianos de Cali y Medellín en los 90, ambos del siglo pasado. Hoy el 90% de la cocaína que circula en los mercados estadounidenses viaja a través de México.

Los siete (7) cárteles más importantes en México operando en el momento actual son el de Sinaloa, el más poderoso, el del Golfo y el de Los Zetas, que operan en las aguas caribeñas, el de Tijuana, con liderazgo en la frontera con Estados Unidos, el de Juárez, el de Beltrán-Leiva –estos tres últimos son escisiones del de Sinaloa– y el de La familia. Constituyen un gran poder dentro del Estado y, sin duda, suponen la amenaza más peligrosa no solo para México sino para toda Centroamérica.

En octubre de 2007, Estados Unidos puso en marcha el Plan Mérida, con 1.4 billones de dólares en un programa de asistencia contra la droga para México y América Central.

Sin embargo, el uso de las fuerzas militares no ha sido la mejor solución, bien sea porque no están bien equipadas para estas misiones o ya sea por haber sido acusadas de abusos contra los derechos humanos o por no disponer de los suficientes medios de inteligencia. Por otra parte, el éxito en México puede cambiar o derivar las operaciones a otros lugares como pueden ser los países centroamericanos que ya están pidiendo ser incluidos en el Plan Mérida.

En Colombia, a pesar de los éxitos conseguidos por el Gobierno de Uribe contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), durante 2008, como fueron la eliminación de Raúl Reyes, Segundo Comandante de las FARC, la muerte de un ataque al corazón del líder Manuel Marulanda junto con la liberación de la antigua candidata presidencial, Ingrid Betancourt, y 15 hombres más, sus actividades aún siguen en vigor.

El nuevo líder de la guerrilla, Alfonso Cano, reconfiguró la estrategia del grupo con el Plan Renacimiento, en 2009, retomando la iniciativa mediante una campaña de liberación de rehenes/prisioneros consiguiendo el apoyo de la población lo que ha dado mayor libertad de maniobra, incrementando los ataques urbanos y las extorsiones al mismo tiempo que ha evitado enfrentamientos directos con los militares gubernamentales.

Por otra parte, los escándalos surgidos en las Fuerzas Armadas colombianas en relación con los derechos humanos, al descubrirse que algunos militares mataban a jóvenes, a menudo indigentes, para utilizar sus cuerpos como guerrilleros muertos y así cobrar una gratificación, ha perjudicado gravemente a esta institución y al Plan Colombia, un programa de ayuda antidroga norteamericano, produciendo una congelación de parte de los 6 billones de dólares previstos en el mismo. A ello se une la relación de personas cercanas a Uribe que son miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (A.U.C.).

Aunque con el nuevo presidente colombiano, Juan Manuel Santos, se espera que se siga con la línea dura de lucha contra los guerrilleros hasta su completa destrucción, la seguridad permanece incierta ya que las FARC continúan lanzando ataques, aunque no muy fuertes, mientras que los paramilitares se están reagrupando en varias bandas armadas.

En **Venezuela**, a partir del 2008, su presidente, Hugo Chávez, ha continuado incrementando su poder anulando a la oposición mediante diferentes medidas antidemocráticas, violentas, utilizando la Asamblea Nacional dominada por sus aliados, controlando puertos, aeropuertos y autopistas, acusando de corrupción a los gobernadores de estados que son de la oposición o eliminando las competencias de los alcaldes de Caracas y Maracaibo, las dos ciudades más grandes del país.

La existencia de un alto nivel de descontento interno inclinará a Chávez, con mucha probabilidad, a mantener unas tensas relaciones internas, especialmente con la oposición, con vistas a las próximas elecciones parlamentarias del 26 de septiembre.

Por ello ha establecido una marcada polarización política con vistas al apoyo que va a prestar la oposición a la recuperación de las instituciones democráticas como garantes del equilibrio, de la imparcialidad y transparencia del Estado venezolano.

Por último, el incremento del tráfico de drogas en el país le ha convertido en la principal plataforma de salida de las rutas de la droga hacia la Unión Europea. De esta forma, se incrementa la inestabilidad y la inseguridad en el territorio venezolano, constituyendo un peligroso factor añadido a las tensiones políticas y sociales existentes en el interior del país.

En **Bolivia**, el 11 de septiembre de 2008, fueron asesinados una treintena de campesinos en Pando, cuyo gobernador fue arrestado, causando un tremendo shock en el país. La masacre dio lugar a que el gobierno y la oposición admitieran que era necesario recuperar la legitimidad del pueblo y se pusieran de acuerdo para impedir más derramamientos de sangre. Pocos días después, el 15 de septiembre, U.NA.SUR. celebró su primer encuentro de emergencia, expresando su apoyo al gobierno de Morales, condenando la violencia y urgiendo a las negociaciones oportunas para alcanzar una última solución.

El 25 de enero de 2009, el 61% de bolivianos aprobó la nueva constitución que recogía los derechos de los indígenas, garantizaba mayor control del gobierno sobre los recursos naturales y establecía algunos derechos para las autonomías regionales. Mientras los indígenas más radicales querían una completa independencia para los diferentes grupos de indígenas, la mayoría de las provincias de la Media Luna votaron contra la constitución.

Por otra parte, el pasado 2 de julio, la Comisión de la Confederación de los Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), exigió al Gobierno que se persone en la marcha para negociar y asegure que sólo aceptarán ya a Evo Morales como interlocutor válido. La marcha indígena continuaba de este modo su camino hacia La Paz para protestar contra la ley de Autonomías. El CIDOB reivindica 18 escaños especiales para grupos étnicos en la Cámara de Diputados.

El intento de diálogo entre el Gobierno y los dirigentes de la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) no ha prosperado y continúa la marcha de protesta contra el ejecutivo de Evo Morales. Esta polarización de Bolivia puede llegar a producir una parálisis política puesto que el presidente se arriesga a que las protestas de la izquierda y de la derecha se unan así como a incrementar la probabilidad de que el descontento se convierta en una protesta violenta.

La nueva constitución de **Ecuador** finalizó con el estancamiento existente entre el legislativo y el ejecutivo, en cuanto a las divisiones de poder democráticas, al incrementar el poder presidencial que le permite poder disolver el Congreso y convocar elecciones. Permite al presidente Correa ser elegido en dos periodos más hasta el 2017. Asimismo, garantiza al presidente el control de la economía colocando al Banco Central bajo la presidencia, dando un importante peso a las comunidades indígenas (35% de la población).

También le ha permitido tener un control, aplicando una política nacionalista, sobre los recursos naturales e incrementar el mismo sobre la producción de petróleo que representa el 60% de las exportaciones. Algo similar está ocurriendo con la minería. Por otra parte, ha incrementado sustancialmente los gastos sociales así como ha disminuido la pobreza en el país desde un 40% al 32%. Sin embargo, no queda claro si la nueva constitución garantiza los canales democráticos adecuados para la población por lo que pueden aparecer protestas sociales.

Por otra parte, el pasado 25 de junio, la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CO.NA.I.E.), realizó una marcha pacífica con alrededor de 3.000 delegados de las Nacionalidades y Pueblos indígenas, trabajadores, estudiantes y otras organizaciones sociales en la ciudad de Otavalo, en rechazo rotundo a las políticas que viene implementando el presidente de la República, Rafael Correa, en relación al movimiento indígena y sectores más empobrecidos.

A este planteamiento hay que añadir que el CO.NA.I.E. ha ratificado los avances en el proceso de lucha hasta construir el verdadero Estado Plurinacional, que garantice el derecho de todos los ecuatorianos, entendiendo que el país es mega diverso, multicultural, multilingüe tal y como se consagra en la constitución.

Perú ha desbancado a Colombia como primer productor mundial de coca, con 119.000 toneladas en 2009, de acuerdo con el informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), del pasado 23 de junio, aunque los cultivos de coca en los países andinos cayeron un 5%, con una reducción de 167.000 hectáreas en 2008 a 158.000 en 2009.

Este hecho significa que ha fracasado la política antidroga llevada a cabo en Lima en contra de la realizada por Bogotá cuyo resultado está muy influenciado por las medidas efectuadas en el Plan Colombia, financiado y apoyado por Estados Unidos.

Sin embargo, el reto más fuerte que se le presenta en estos momentos al presidente Alan García se halla en el resurgimiento del grupo insurgente de Sendero Luminoso, que ha vuelto a la lucha con una cantidad estimada de 600 guerrilleros. La respuesta militar ha sido criticada desde varios sectores que se inclinan porque la situación debiera ser manejada por la policía.

La actual crisis institucional que actualmente está viviendo **Nicaragua**, se inició a raíz de las elecciones municipales de noviembre de 2008, que la oposición denunció como fraudulentas. Entonces, los opositores decidieron no tramitar en el legislativo la renovación de ningún cargo institucional en protesta por el resultado de dichos comicios.

El boicot empeoró cuando la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (C.S.J.) anuló, ya en octubre de 2009, el artículo que prohíbe la reelección presidencial, posibilitando así la reelección como presidente de Daniel Ortega, en 2011.

A causa de esta parálisis, el presidente nicaragüense aprobó un decreto por el cual prorrogaba en sus cargos a los miembros de varios poderes del Estado a los que se les ha vencido o estaba por vencer el mandato. En dicho decreto, confirma, entre otros, en sus cargos a tres magistrados de la C.S.J. y al pleno de árbitros del Consejo Supremo Electoral, acusados por la oposición de fraude en las elecciones municipales de 2008.

La detención irregular de cinco alcaldes y una decena de vicealcaldes y concejales en el territorio nicaragüense, durante el pasado mes de junio, por no apoyar la reelección del presidente Ortega para el 2011, confirma el atropello de las instituciones democráticas por parte del actual presidente de Nicaragua.

CONCLUSIONES: APROXIMACIÓN ESTRATÉGICA

En la primera década de este nuevo siglo, los Gobiernos latinoamericanos han hecho una política económica ortodoxa y sostenible que les ha permitido sobrellevar la crisis financiera y económica con holgura. Las previsiones hasta 2020 señalan que la región tendrá un crecimiento acumulativo del 3,5% y la renta per cápita pasará de 12.000 dólares a 26.000. En concreto, América Latina y el Caribe se hallan ante una década decisiva.

En el momento actual, la estrategia contra las nuevas amenazas que afectan a los países de América Latina se debe llevar a cabo en varios frentes ya que, por un lado, las amenazas son distintas y complejas y, por otro, atañen de manera muy diferente a los países latinoamericanos. La estrategia debe ser regional, no local, preventiva más bien que destructiva, eliminando las causas de las amenazas antes que las consecuencias. Entre otras medidas que se podían llevar a cabo destaco las relacionadas a continuación.

En primer lugar, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la recuperación del imperio de la ley, junto con la promoción de políticas tendentes a la reducción de la pobreza, la desigualdad económica y la exclusión social, se convierten en medidas imprescindibles para la superación de la crisis de gobernabilidad que padecen algunos países latinoamericanos y, en consecuencia, para el refuerzo de la seguridad.

Las instituciones como el poder judicial y la policía junto a los organismos de asistencia social deben ser reforzadas en la región como acciones a llevar a cabo para alcanzar aquellos objetivos de desarrollo económico y social que son el mejor antídoto a las crisis de seguridad.

Es preciso integrar todos los elementos del Estado para hacer frente a las nuevas amenazas. Desde las medidas políticas a las policiales, pasando por las económicas, diplomáticas, culturales, sociales o militares. Las Fuerzas Armadas se debieran utilizar cuando no son suficientes los otros instrumentos del Estado. En este sentido, el utilizar directamente, como norma, a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la droga, por ejemplo, cuando no están preparadas para ello puede ser contraproducente como ya se está viendo en algunos países latinoamericanos –México, Honduras o El Salvador–.

Por otro lado, los nuevos tiempos están exigiendo caminar a través de iniciativas multilaterales complementando las bilaterales. Se consigue una mayor eficacia en los resultados puesto que, por una parte, elimina suspicacias en las relaciones y, por otra, promueve el diálogo, la cooperación o la asociación entre distintos países ante intereses comunes, objetivo prioritario de la integración latinoamericana.

A corto plazo, resulta indispensable integrar todos los esfuerzos que se están haciendo a través del Plan Colombia, en Colombia, Plan Mérida, en México y de los programas nacionales de “Plan Escoba”, en Guatemala, “Mano Dura”, en El Salvador, y “Libertad Azul”, en Honduras. Es decir, coordinar y sistematizar los planes y medidas ya existentes, buscando el esfuerzo colectivo para alcanzar los resultados más eficientes.

A medio plazo, la mejor forma de combatir estas nuevas amenazas, consiste en conseguir que todos los países latinoamericanos establezcan un frente común contra ellas. Hacerlas frente como un todo, por medio de las nuevas instituciones que se están desarrollando para alcanzar la integración plena de ALC, a través de un proceso de geometría variable – SICA, Mercosur; Grupo de Río, Comunidad Andina o U.NA.SUR.– y cuya máxima ambición se ha materializado en las Cumbres de 2008 en Costa de Sauipe (Brasil) y 2010 en Cancún (México), donde están incluidos los 33 Estados de América Latina y el Caribe.

En un nivel más elevado, como muestra el informe de la ONODC para el caso del narcotráfico, como nueva amenaza más peligrosa, que lo podemos utilizar como punta de lanza, para el próximo futuro hay que acometer el problema desde una perspectiva global en la que el papel del subcontinente, el de Estados Unidos y el de la Unión Europea –productores y consumidores– en coordinación y cooperación, se consideran trascendentales. La prevención e inteligencia, serán los dos campos en los que se ganará, o perderá la guerra contra las drogas.

En ALC, en el combate contra las nuevas amenazas, es preciso implantar una nueva dinámica, una nueva actitud. Al ser un problema de Estado, no se debe delegar estos asuntos en la policía, cerrando los ojos a una cuestión que está contaminando a toda la sociedad llegando a poner en jaque a la democracia.

En definitiva, la década entrante de ALC va a estar caracterizada por el combate a las nuevas amenazas donde la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado tendrá una alta prioridad. La aproximación estratégica que se sugiere supone un cambio de rumbo sustentado en tres postulados:

- a). Uso de todos los instrumentos del Estado –todo el poder del Estado–, desde el inicio;
- b). Hacer frente a las nuevas amenazas como un todo único; y
- c). La respuesta debe ser multilateral, con geometría variable, antesala de toda la ALC integrada como una entidad geopolítica plena.

Esto permitiría que, una vez solucionados sus problemas internos, ALC podía mirar más al exterior, proyectarse con mayor intensidad hacia el mundo, hacia la comunidad internacional, como una realidad geopolítica única, tratando y mirando de tu a tú a los grandes jugadores planetarios, ya sea a los Estados Unidos, a la Unión Europea o a China. Constituiría el futuro más prometedor para América Latina y el Caribe.-

BIBLIOGRAFÍA

Globalización y violencia en América Latina. Debilidad estatal, inequidad y crimen organizado inhiben el desarrollo económico. Francisco Rojas Aravena. Secretario General del FLACSO. Revista de Pensamiento Iberoamericano N.^{to} 2. 2008.

Strategic Survey 2009. The Annual Review of World Affairs.

<http://prontus.lanacion.cl/la-globalizacion-de-las-maras/noticias> 11/10/2009.

<http://lacomunidad.elpais.com/marasyotrosgrupos/25/05/10>

La lucha extremista echa mano de la propaganda y de la demografía. Mario Fuentes Destarac. El Periódico 10/05/10. Guatemala.

Los caminos en la lucha contra las drogas. Rogelio Núñez Castellano.
<http://revistatenea.es/02/07/10.->

